

ESPAÑOL

NOTA INFORMATIVA · NUEVA LEGISLACIÓN

Asunto: LFIIEDB – Nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar

Decreto: Diario Oficial de la Federación (“DOF”), Edición Vespertina, 09 de abril de 2026

Vigencia: Entrada en vigor: 10 de abril de 2026

01 RESUMEN EJECUTIVO

El 09 de abril de 2026 se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (“**LFIIEDB**”), y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (“**LFPRH**”) para alinear el marco presupuestario con estos esquemas. La LFIIEDB entró en vigor el 10 de abril de 2026.

México no contaba con una ley de alcance general para la participación privada en infraestructura estratégica. La LFIIEDB cubre ese vacío pero no reproduce el modelo de las Asociaciones Público Privadas (“**APP**”): a diferencia de las APP y concesiones tradicionales —donde el Estado cedía temporalmente la propiedad de la infraestructura y absorbía los riesgos más costosos—, este régimen invierte esa lógica: el Estado mantiene la rectoría y la propiedad pública en todo momento y los activos generados o adquiridos durante la ejecución del proyecto reversionan obligatoriamente al Estado al término del contrato (Art. 35) y el privado participa como socio o contratista con obligaciones medibles de inversión y desempeño. Crea un régimen único que habilita la inversión privada —incluida la extranjera— en un abanico amplio de sectores, instrumenta vehículos de inversión estructurados, incorpora estímulos fiscales discretivos e introduce, por primera vez en este tipo de contratos, una cláusula de equilibrio económico y arbitraje expresamente regulados en ley. El Decreto también reforma la LFPRH para alinear el marco presupuestario con estos esquemas. La ley no constituye fuente autónoma de gasto, endeudamiento ni garantías a cargo del Estado (Art. 1).

La LFIIEDB no es operativa de inmediato en su totalidad. Los artículos transitorios fijan dos plazos críticos: (i) Reglamento de la LFIIEDB (el “**Reglamento**”) y lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“**SHCP**”) (Arts. 6 y Transitorios Segundo y Tercero): a más tardar el 7 de octubre de 2026; e (ii) instalación del Consejo de Planeación Estratégica (Transitorio Cuarto): a más tardar el 8 de agosto de 2026. Sin el Consejo constituido, ningún proyecto puede obtener la declaratoria de elegibilidad que da acceso a los mecanismos de la ley.

ENGLISH

CLIENT BRIEFING NOTE · NEW LEGISLATION

Re: LFIIEDB – Law for the Promotion of Investment in Strategic Infrastructure for Development with Well-Being

Decree: Federal Official Gazette (*Diario Oficial de la Federación*), Evening Edition, April 9, 2026

Effective: April 10, 2026

01 EXECUTIVE SUMMARY

On April 9, 2026, Mexico’s Federal Official Gazette published the Decree enacting the Law for the Promotion of Investment in Strategic Infrastructure for Development with Well-Being (“**LFIIEDB**”) and amending various provisions of the Federal Budget and Fiscal Responsibility Law (“**LFPRH**”) to align the budgetary framework with these schemes. The LFIIEDB entered into force on April 10, 2026.

Mexico lacked a general-purpose statute governing private participation in strategic infrastructure. The LFIIEDB fills that gap but does not replicate the Public-Private Partnerships (“**PPP**”) model: unlike traditional PPP and concession schemes —under which the State temporarily transferred infrastructure ownership to the private sector and absorbed the most costly risks— this regime inverts that logic: the State retains direction and ownership of the public infrastructure at all times, and assets generated or acquired during project execution revert obligatorily to the State upon contract expiry (Art. 35), and the private sector participates as a partner or contractor with measurable investment and performance obligations. It creates a single regime enabling private investment—including foreign capital— across a broad range of sectors, establishes structured investment vehicles, introduces discretionary tax incentives, and for the first time enshrines, by statute, an economic equilibrium clause and arbitration mechanism in long-term public contracts. The Decree also amends the LFPRH to align the budgetary framework with these schemes. The statute does not constitute an autonomous source of State expenditure, indebtedness, or guarantees (Art. 1).

The LFIIEDB is not immediately operational in its entirety. The transitory articles set forth two critical deadlines: (i) the LFIIEDB implementing regulations (the “**Implementing Regulations**”) and the Ministry of Finance and Public Credit (“**SHCP**”) guidelines (Arts. 6 and Transitory Articles Two and Three): by October 7, 2026; and (ii) constitution of the Strategic Planning Council for Investment in Infrastructure (*Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura*) (“**Council**”) (Transitory Article Four): by August 8, 2026. Without a constituted Council, no project can obtain the eligibility determination required to access the statute’s mechanisms.

02 DESARROLLO

Arquitectura legal y sectores elegibles (Arts. 10-44, 45 y 66-76)

La ley articula tres elementos: (i) el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, órgano consultivo permanente sin personalidad jurídica propia, presidido por el Ejecutivo Federal, cuyas determinaciones no implican por sí mismas autorización de gasto (Arts. 66-76); (ii) los Vehículos de Propósito Específico (“**VPE**”) — fideicomisos, Sociedades Anónimas (“**SA**”), Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (“**SAPI**”) o Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión Bursátil (“**SAPIB**”) — vehículos de objeto exclusivo que pueden emitir certificados bursátiles fiduciarios, estructura técnicamente compatible con la inversión de capital institucional de largo plazo, cuya constitución no implica garantía del Estado (Arts. 10-21); y (iii) los Esquemas de Participación Mixta: Contratación de Largo Plazo (Art. 31) e Inversión Mixta (Art. 37), con distribución estructurada de riesgos. Los sectores elegibles (Art. 45) abarcan comunicaciones, transportes, agua, energía, salud, educación, medio ambiente, turismo, parques industriales y tecnología, entre otros alineados con el Plan Nacional de Desarrollo (los proyectos del sector energético continúan rigiéndose por la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos, conforme al segundo párrafo del Art. 24 LFIEDB). La elegibilidad la determina el Consejo; su resolución no es un acto de autoridad ni admite recurso (Art. 57). La LFIEDB no deroga la Ley de Asociaciones Público-Privadas (“**LAPP**”), que continúa vigente (Art. 89 LFIEDB, aplicación supletoria). Los proyectos APP o de concesión celebrados con anterioridad no migran automáticamente al nuevo régimen: el Transitorio Octavo del Decreto permite la migración voluntaria, no obstante, la condiciona al acuerdo de las partes y a la aprobación del Consejo. Hay, por tanto, un período de coexistencia de marcos cuya duración no está acotada en la ley y cuya gestión tiene consecuencias contractuales distintas según el régimen aplicable.

Acceso de Capital Extranjero: régimen abierto con excepciones acotadas (Arts. 24 LFIEDB y LIE)

El Art. 24 establece que los proyectos con participación de capital extranjero se rigen simultáneamente por la LFIEDB, la Ley de Inversión Extranjera (“**LIE**”) y la normatividad sectorial; ninguno de estos marcos sustituye a los demás. La regla general es de acceso abierto: la mayoría de los sectores elegibles bajo la LFIEDB no tienen tope de capital extranjero y permiten 100% de Inversión Extranjera Directa (“**IED**”). Las excepciones y requisitos de estructuración aplicables al VPE son:

- Sectores restringidos (Arts. 7-8 LIE): solo en actividades expresamente listadas aplican topes máximos de IED. El Art. 8 LIE requiere autorización previa de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (“**CNIE**”) para participación extranjera

02 DEVELOPMENT

Legal Architecture and Eligible Sectors (Arts. 10–44, 45 and 66–76)

The Law articulates three elements: (i) the Council, a permanent advisory body without legal personality, chaired by the Federal Executive, whose determinations do not, by themselves, constitute expenditure authorization (Arts. 66–76); (ii) Special Purpose Vehicles (*Vehículos de Propósito Específico*) (“**SPV**”) — trusts (*fideicomisos*), Corporations (*Sociedad Anónima*, “**SA**”), Investment Promotion Corporations (*Sociedad Anónima Promotora de Inversión*, “**SAPI**”), or Exchange-Listed Investment Promotion Corporations (*Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil*, “**SAPIB**”) — single-purpose vehicles that may issue fiduciary securities (*certificados bursátiles fiduciarios*), a structure technically compatible with long-term institutional capital investment, whose incorporation does not imply a State guarantee (Arts. 10–21); and (iii) Mixed Participation Schemes (*Esquemas de Participación Mixta*): Long-Term Contracting (*Contratación de Largo Plazo*) (Art. 31) and Mixed Investment (*Inversión Mixta*) (Art. 37), with structured risk allocation. Eligible sectors (Art. 45) cover communications, transportation, water, energy, health, education, environment, tourism, industrial parks, and technology, among others aligned with the National Development Plan (energy sector projects continue to be governed by the Electric Industry Law (*Ley del Sector Eléctrico*) and the Hydrocarbons Law (*Ley del Sector de Hidrocarburos*), pursuant to Art. 24 LFIEDB, second paragraph). Eligibility is determined by the Council; its decision is not an act of authority and is not subject to appeal (Art. 57). The LFIEDB does not repeal the Public-Private Partnerships Law (*Ley de Asociaciones Público-Privadas*) (“**LAPP**”), which remains in force (Art. 89 LFIEDB, suppletory application). Existing PPP or concession projects do not automatically migrate to the new regime: Transitory Article Eight of the Decree permits voluntary migration, but conditions it on agreement by the parties and approval of the Council. There is therefore a period of parallel coexistence of frameworks whose duration is not bounded by the statute, and whose management carries distinct contractual consequences depending on the applicable regime.

Foreign Capital Access: Open Regime with Defined Exceptions (Arts. 24 LFIEDB and LIE)

Art. 24 provides that projects involving foreign capital are governed simultaneously by the LFIEDB, the Foreign Investment Law (“**LIE**”), and applicable sector-specific regulation; none of these frameworks supersedes the others. The general rule is open access: most LFIEDB-eligible sectors carry no foreign-capital ceiling and permit 100% Foreign Direct Investment (“**FDI**”). The exceptions and structuring requirements applicable to the SPV are:

superior al 49% en puertos, aeropuertos, ferrocarriles, escuelas privadas y servicios legales. Fuera de esa lista, no hay restricción de capital.

- Inversión neutra (Arts. 18-20 LIE): donde apliquen topes, este mecanismo permite al inversionista extranjero conservar plenos derechos económicos en el VPE sin que su participación compute para el límite sectorial. Requiere autorización de la CNIE.

- Registro Nacional de Inversión Extranjera (“**RNIE**”) (Art. 32 LIE): todo VPE con capital extranjero debe inscribirse dentro de los 40 días hábiles siguientes a su constitución o adquisición de acciones.

- Zona restringida (Arts. 11-14 LIE): proyectos con inmuebles en zonas costeras o fronterizas requieren permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Reformas a la LFPRH: Mecanismos de Protección Presupuestaria (Arts. 21, 32, 35 Bis y 50 LFPRH)

El mismo Decreto reforma la LFPRH para dar tratamiento presupuestario específico a los compromisos derivados del Contrato de Inversión Estratégica (“**CIE**”), instrumento mediante el cual se formalizan los Esquemas de Participación Mixta. El Art. 50 LFPRH incorpora expresamente al CIE dentro de los contratos plurianuales que pueden celebrar los ejecutores de gasto. A partir de esa incorporación, la LFPRH reformada dota a estos compromisos de tres protecciones, aplicables únicamente respecto de Proyectos Procedentes (aquellos cuya elegibilidad y procedencia han sido determinados por el Consejo para su incorporación a un VPE y acceso a los Apoyos y Beneficios de la LFIIEB, Arts. 55-56, 60, 64-65):

- Preferencia presupuestal (Art. 32 LFPRH): el proyecto de Presupuesto de Egresos debe prever, para el ejercicio presupuestado y los cinco años siguientes, los compromisos plurianuales del CIE, con registro conforme a los pagos pactados contractualmente: los compromisos excedentes no cubiertos tienen preferencia frente a otras previsiones de gasto, sujeto en todo caso a la disponibilidad presupuestaria anual.

- Protección ante disminución de ingresos (Art. 21 LFPRH): ante ajustes por caída de ingresos previstos en la Ley de Ingresos, la autoridad debe procurar (no garantizar) no afectar el gasto presupuestado para los Proyectos para el Desarrollo con Bienestar antes que otros conceptos no protegidos.

- Contratación sin suficiencia presupuestaria (Art. 35 Bis LFPRH): la SHCP puede autorizar, excepcionalmente y de forma discrecional, el inicio de procedimientos de contratación sin contar previamente con suficiencia presupuestaria, condicionado a tramitar la adecuación presupuestaria antes del fallo o adjudicación

Estos mecanismos no alteran la regla del Art. 1 LFIIEB (la ley no es fuente autónoma de gasto, deuda ni garantías del Estado) y no son objeto de desarrollo adicional en el Reglamento, que no contiene disposiciones específicas

- Restricted sectors (Arts. 7–8 LIE): maximum FDI ceilings apply only to expressly listed activities. Art. 8 LIE requires prior National Foreign Investment Commission (“**CNIE**”) authorization for foreign participation above 49% in ports, airports, railways, private schools, and legal services. Outside that list, there is no capital restriction.

- Neutral investment (Arts. 18–20 LIE): where ceilings apply, this mechanism allows the foreign investor to retain full economic rights in the SPV without that participation counting toward the sector ceiling. Requires CNIE authorization.

- National Foreign Investment Registry (“**RNIE**”) (Art. 32 LIE): any SPV with foreign capital must register within 40 business days of incorporation or share acquisition.

- Restricted zone (Arts. 11–14 LIE): projects involving real property in coastal or border zones require a permit from the Ministry of Foreign Affairs (*Secretaría de Relaciones Exteriores*).

LFPRH Reforms: Budgetary Protection Mechanisms (Arts. 21, 32, 35 Bis and 50 LFPRH)

The same Decree demands the LFPRH to establish specific budgetary treatment for commitments arising from the Strategic Investment Contract (“**CIE**”), the instrument through which Mixed Participation Schemes are formalized. Art. 50 LFPRH expressly brings the CIE within the category of multi-annual contracts that spending executors may enter. On that basis, the reformed LFPRH affords these commitments three protections, applicable only to Eligible Projects (*Proyectos Procedentes*) (projects whose eligibility and approval for SPV incorporation and access to the LFIIEB support mechanisms have been determined by the Council, Arts. 55-56, 60, 64-65):

- Budgetary priority (Art. 32 LFPRH): the draft Federal Expenditure Budget must provide, for the budgeted fiscal year and the following five years, for multi-annual CIE commitments, with budgetary registration aligned to the contractually agreed payment schedule; non-covered excess commitments receive priority over other spending allocations, subject in all cases to annual budgetary availability.

- Protection against revenue shortfalls (Art. 21 LFPRH): here spending adjustments are required due to shortfalls under the Federal Revenue Law (*Ley de Ingresos*), the authority must endeavor (nor guarantee) to shield budgetary spending on Projects for Development with Well-Being ahead of other, unprotected items.

- Contracting without prior budgetary sufficiency (Art. 35 Bis LFPRH): the SHCP may, exceptionally and at its discretion, authorize the commencement of procurement procedures without prior budgetary sufficiency, conditioned on the corresponding budgetary adjustment being processed before the contract award.

These mechanisms do not displace Art. 1 LFIIEB (the statute remains not an autonomous source of State

sobre la materia; las protecciones residen íntegramente en el texto reformado de la LFPRH.

Régimen de Controversias (Arts. 125-126 y 131-133)

El Art. 125 fr. IV establece que la única causa de modificación contractual vinculada a circunstancias sobrevenidas es el restablecimiento del equilibrio económico del proyecto. El Art. 126 regula este mecanismo: el contratista, desarrollador o proveedor tiene derecho a la revisión del contrato cuando, derivado de un acto administrativo, legislativo o jurisdiccional de autoridad competente, el costo de ejecución aumente de forma sustancial y duradera poniendo en riesgo la viabilidad financiera del proyecto. La revisión solo procede si el acto: (i) es posterior a la presentación de posturas económicas; (ii) no era previsible al prepararse y adjudicarse el proyecto; y (iii) representa un cambio a las disposiciones aplicables al desarrollo del proyecto. Dado el horizonte de 4 a 40 años de los contratos de larga duración, los cambios regulatorios y legislativos son inherentes al plazo. Un acto del Estado que detone el Art. 126 puede constituir simultáneamente una violación de Trato Justo y Equitativo (“**TJE**”) o una expropiación indirecta bajo el Tratado Bilateral de Inversión (“**TBI**”) aplicable o el Cap. 14 del T-MEC; ambas vías coexisten de forma independiente.

El Art. 131 habilita el arbitraje de estricto derecho para divergencias técnicas o económicas derivadas de VPEs o de Proyectos Procedentes, bajo las leyes federales mexicanas, en idioma español y con laudo obligatorio, siguiendo el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. Quedan expresamente excluidos: la revocación de autorizaciones, los actos de autoridad y la validez de actos administrativos, materias reservadas a los tribunales federales – entendiéndose el Tribunal Federal de Justicia Administrativa –. Para los Contratos de Inversión Mixta, los Arts. 132-133 añaden dos etapas previas: negociación de buena fe (Art. 132, en el plazo que fije el instrumento de inversión) y, si fracasa, un Comité de tres expertos (Art. 133), con competencia limitada a materias técnicas y económicas – cuestiones jurídicas y modificaciones contractuales expresamente excluidas. El Art. 133 no establece reglas de procedimiento, institución supervisora ni autoridad nominadora supletoria, y, a diferencia del resto de la ley, no remite su desarrollo al Reglamento.

expenditure, indebtedness, or guarantees) and are not further developed in the Implementing Regulations, which contain no specific provisions on this subject; the protections reside entirely in the amended text of the LFPRHA.

Dispute Regime (Arts. 125–126 and 131–133)

Art. 125 section IV establishes that the only ground for contract modification linked to supervening circumstances is the restoration of the project’s economic equilibrium. Art. 126 governs this mechanism: the contractor, developer, or supplier is entitled to seek contract revision when, because of an administrative, legislative, or jurisdictional act of a competent authority, the cost of performance increases substantially and durably, threatening the project’s financial viability. Revision proceeds only if the act: (i) occurs after submission of the economic bids; (ii) could not have been foreseen at the time of project preparation and award; and (iii) represents a change to the provisions applicable to project development. Given the 4-to-40-year horizon of long-term contracts, regulatory and legislative change is inherent to the term. A State act triggering Art. 126 may simultaneously constitute a Fair-and-Equitable-Treatment (“**FET**”) violation or indirect expropriation under the applicable Bilateral Investment Treaty (“**BIT**”) or Chapter 14 of the USMCA; both remedies coexist independently.

Art. 131 enables strict-law arbitration for technical or economic disputes arising from SPVs or Eligible Projects (*Proyectos Procedentes*), under Mexican federal law, in Spanish, with a binding award, following Title IV of Book Five of the Code of Commerce (*Código de Comercio*). Expressly excluded are: revocation of authorizations, acts of authority, and the validity of administrative acts, which are reserved to federal courts. For Mixed Investment Contracts (“*Contratos de Inversión Mixta*”), Arts. 132–133 add two prior steps: good-faith negotiation (Art. 132, within the timeline set by the investment instrument) and, if unsuccessful, a three-expert Committee (Art. 133), with jurisdiction limited to technical and economic matters – legal questions and contractual modifications expressly excluded. Art. 133 establishes no procedural rules, supervising institution, or default appointing authority and, unlike the rest of the statute, it does not delegate its operational development to the implementing regulations.

03 IMPLICACIONES PRÁCTICAS

La LFIIEDB abre oportunidades concretas de inversión en infraestructura estratégica, no obstante, su operatividad es parcial en este momento y su régimen de controversias presenta elementos que merecen atención específica:

1. Un nuevo paradigma, no una nueva versión del mismo modelo. La LFIIEDB no es una Ley APP reformada. El dictamen de las Comisiones Unidas que la aprobó lo expresa con precisión: el nuevo modelo “*invierte la lógica*” de las APP tradicionales. La diferencia estructural es que, bajo la

03 PRACTICAL IMPLICATIONS

The LFIIEDB opens concrete investment opportunities in strategic infrastructure, but its operability is currently partial, and its dispute regime contains elements that warrant specific attention:

1. A new paradigm, not a new version of the same model. The LFIIEDB is not a reformed PPP statute. The Joint Committees’ Report that approved it states explicitly that the new model “*inverts the logic*” of traditional PPPs. The structural difference is that under the LFIIEDB, the State retains direction over the project and ownership of the

LFIIEDB, el Estado conserva la rectoría del proyecto y la propiedad de la infraestructura pública subyacente y los activos del proyecto reversion al Estado al término del contrato (Art. 35). Esto tiene dos consecuencias prácticas para el inversionista extranjero: (i) la figura de concesión — en la que el privado operaba con activos propios con garantías de ingreso mínimo — no es el vehículo natural de este régimen, aunque la ley no la prohíbe expresamente (Art. 116); y (ii) los proyectos existentes bajo APP o concesión no migran automáticamente y pueden coexistir bajo su régimen original, lo que genera un periodo de dualidad regulatoria cuya gestión requiere análisis caso por caso (Octavo Transitorio).

2. La ventana de acceso es real pero no inmediata. El mercado que abre la ley es amplio —comunicaciones, transporte, energía, salud, educación, entre otros—, con acceso expreso a inversionistas extranjeros y 100% de IED en la mayoría de los sectores. Sin embargo, el Consejo de Planeación Estratégica debe quedar instalado antes del 8 de agosto de 2026 y el Reglamento debe emitirse antes del 7 de octubre de 2026. Hasta que ambos estén vigentes, no existe un proceso operativo para que un proyecto obtenga la declaratoria de elegibilidad. El momento relevante para iniciar el posicionamiento estratégico es ahora; la ejecución formal comenzará en el tercer trimestre de 2026.

3. La preferencia presupuestal fortalece la bancabilidad del CIE, no obstante, no la garantiza. Los tres mecanismos presupuestarios de la LFPRH reformada reducen el riesgo de que compromisos plurianuales derivados de un CIE queden desprotegidos frente a los ciclos presupuestarios anuales. Ninguno, sin embargo, constituye una garantía incondicional: la preferencia del Art. 32 LFPRH opera sujeta a la disponibilidad presupuestaria anual; la protección del Art. 21 LFPRH es una obligación de medio, no de resultado; y la autorización del Art. 35 Bis LFPRH es discrecional de la SHCP. Para efectos de estructuración financiera, estos mecanismos deben presentarse ante inversionistas e instituciones financieras como factores que mitigan (no eliminan) el riesgo presupuestario, consistente con la regla del Art. 1 LFIIEDB.

4. La cláusula de equilibrio económico (Art. 126) es un diferenciador jurídico relevante. A diferencia de los regímenes de APP anteriores en México, el Art. 126 incorpora en ley —no solo en contrato— el derecho del privado a la revisión cuando un acto de autoridad altere sustancialmente el costo del proyecto. Esto tiene dos consecuencias para el inversionista extranjero: (i) el estándar legal ya está definido, lo que reduce la incertidumbre sobre la exigibilidad del mecanismo; y (ii) un acto que lo detone puede constituir simultáneamente una violación de TJE o expropiación indirecta bajo el TBI aplicable o el Cap. 14 del T-MEC, con ambas vías disponibles de forma independiente.

5. El Comité de Expertos de los Contratos de Inversión Mixta (Art. 133) carece de institución supervisora, autoridad nominadora supletoria y reglas de procedimiento. A diferencia del resto de la ley —cuyo desarrollo operativo sí

underlying public infrastructure, and project assets revert to the State upon contract expiry (Art. 35). This has two practical consequences for the foreign investor: (i) the concession model —under which the private party operated assets it effectively owned, with minimum revenue guarantees— is not the natural vehicle of this regime, although the statute does not expressly prohibit it (Art. 116); and (ii) existing PPP or concession projects do not automatically migrate and may continue under their original regime, creating a period of regulatory duality whose management requires case-by-case analysis (Transitory Article Eight).

2. The access window is real but not immediate. The market opened by the statute is broad —communications, transportation, energy, health, education, among others— with express access for foreign investors and 100% FDI in most sectors. However, the Council must be constituted by August 8, 2026, and the implementing regulations issued by October 7, 2026. Until both are in place, there is no operative process for a project to obtain an eligibility determination. The relevant moment for strategic positioning is now; formal execution will begin in Q3 2026.

3. Budgetary priority strengthens CIE bankability but does not guarantee it. The three budgetary mechanisms under the reformed LFPRH reduce the risk that multi-annual CIE commitments go unprotected across annual budget cycles. None, however, is an unconditional guarantee: the priority under Art. 32 LFPRH is subject to annual budgetary availability; the protection under Art. 21 LFPRH is an obligation of means, not of result; and the authorization under Art. 35 Bis LFPRH is discretionary and rests with the SHCP. For financial structuring purposes, these mechanisms should be presented to investors and financial institutions as factors that mitigate (not eliminate) budgetary risk, consistent with the Art. 1 LFIIEDB rule.

4. The economic equilibrium clause (Art. 126) is a meaningful legal differentiator. Unlike previous PPP regimes in Mexico, Art. 126 embeds in statute —not merely in contract— the private party's right to revision when an act of authority materially alters project costs. This has two consequences for the foreign investor: (i) the legal standard is already defined, reducing uncertainty about the mechanism's enforceability; and (ii) an act triggering it may simultaneously constitute a fair-and-equitable-treatment violation or indirect expropriation under the applicable BIT or Chapter 14 of the USMCA, with both remedies independently available.

5. The Expert Committee under Mixed Investment Contracts (Contratos de Inversión Mixta) (Art. 133) lacks a supervising institution, default appointing authority, and procedural rules. Unlike the rest of the statute —whose operational development will be addressed in the implementing regulations— Art. 133 contains no reference to that instrument. The gaps are therefore structural in nature: they are not destined to be filled by secondary regulation, and their resolution will fall to each individual contract. This means that the practical effectiveness of the mechanism depends entirely on the terms of the contracts themselves.

estará en el Reglamento—, el Art. 133 no contiene remisión a ese instrumento. Los vacíos son, por tanto, de naturaleza estructural: no están destinados a cubrirse por vía reglamentaria y su integración deberá resolverse en cada instrumento contractual. Esta circunstancia hace que la efectividad práctica del mecanismo quede supeditada, en su totalidad, a lo que dispongan los propios contratos.